

Aprendizajes y encrucijadas del
periodismo

Entre la paz de Pastrana y la seguridad
democrática de Uribe

FABIO LÓPEZ DE LA ROCHE

Recibido: 06/09/05
Aceptado: 18/09/05

7 - 45

Resumen

El autor hace un profundo análisis sobre los aciertos y errores de los medios de comunicación al informar sobre el conflicto armado y los procesos de paz que se han llevado a cabo en Colombia. Presenta, en una primera parte, una visión sintética del periodismo en el proceso de paz con las FARC entre 1999 y 2002, poniendo especial atención a la relación con las fuentes de información acerca de la guerra. Una segunda parte analiza los problemas y riesgos del cubrimiento periodístico del conflicto en el contexto de la seguridad democrática del presidente Uribe y de sus presiones por redefinirlo semánticamente.

Palabras clave: conflicto armado, proceso de paz, medios de comunicación, fuentes, unanimismo, unifuentismo.

The author analyses deeply the hits and mistakes of mass media when reporting on the armed conflict and the peace processes that have occurred in Colombia. In the first part, he presents a synthetic view of the role of journalism in the peace process with the FARC between 1999 and 2002, paying special attention to the relationship with the information sources about the war. In the second part, he analyzes the problems and risks of news coverage on the conflict, in the context of President Uribe's democratic security and his pressure to systematically redefine the conflict.

Key words: armed conflict, peace process, mass media, sources, unanimism, unisourceism.

FABIO LÓPEZ DE LA ROCHE

Historiador y analista cultural y de medios. Profesor Asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI). Coordinador del Grupo de Investigación “Comunicación, cultura y ciudadanía” del IEPRI. Director entre 2002 y 2003 del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura (IECO) de la Universidad Nacional de Colombia.

Correo electrónico: flaroche58@yahoo.com

Introducción

El periodismo y los medios de comunicación, en su cubrimiento noticioso y de opinión del conflicto armado interno, de los procesos de paz pasados y futuros, y de las posibilidades de reconciliación nacional, constituyen un campo de tensiones sociales e institucionales, como también de presiones de parte de distintos actores político-militares. Al mismo tiempo, ellos funcionan como un importante lugar de encuentro de experiencias, ideas, perspectivas y propuestas de distintos grupos sociales nacionales e internacionales que participan hoy en la discusión sobre el presente y el futuro de nuestra sociedad.

En cuanto a la primera dimensión, la de las tensiones, distintos actores del conflicto intentan incidir para que sus versiones, opiniones o interpretaciones de los hechos sean las que predominen en la información de los medios. Allí juegan unos intereses políticos, ideológicos, económicos, en medio de cuyas presiones deben funcionar el periodismo y los medios de comunicación. Como veremos más adelante, los medios terminan a veces tomando partido en calidad de actores del conflicto, en virtud de las afinidades políticas de sus dueños o directores, o de las hegemonías político-militares de las regiones en donde operan, las cuales les demandan incondicionalidad, neutralidad tolerante o silencio cómplice con el orden allí construido.

Es necesario, en esta introducción, hacer dos advertencias. De un lado, dejar en claro que la libertad de prensa en ningún país, aun en los más pluralistas y democráticos, es total. Ella debe enfrentar múltiples riesgos, limitaciones y enemigos, derivados de los intereses económicos, políticos y militares de los individuos y grupos vinculados a prácticas de corrupción y a otras formas de delincuencia. En una reciente intervención decía don José Salgar que en todos sus años de ejercicio del periodismo en Colombia nunca había conocido algún momento en que los periodistas no hubieran tenido que lidiar con una serie de talanqueras a la libertad de prensa. Enfatizaba al mismo tiempo que nunca nuestro país había vivido una situación tan difícil para el periodismo como la presente.¹

De otro lado, y con respecto al papel de los medios y del periodismo en el conflicto armado y los procesos de paz, es necesario precisar que a los

1 Intervención de José Salgar en la mesa redonda realizada en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, con Javier Darío Restrepo y el panelista invitado Ryszard Kapuscinski, Bogotá, lunes 3 de mayo de 2004. La afirmación es discutible si recordamos los pactos de silencio de los tiempos de la Violencia de los cuarenta y cincuenta, los años de las intimidaciones del narcotráfico a los periodistas y el asesinato de don Guillermo Cano, o los años del narcoterrorismo.

medios no se les puede adjudicar la responsabilidad total por el mal cubrimiento o la inadecuada comprensión ciudadana de nuestros conflictos armados, o por el éxito o fracaso de un proceso de paz. Si bien tienen responsabilidades grandes en la visibilidad social de esos procesos y en la orientación de la opinión para la comprensión de los mismos, ellos son coproductores de esa visibilidad social del conflicto o de la paz, junto a otras instituciones sociales y políticas que sirven como fuentes de la información o que reaccionan ante ella.

Los aprendizajes de los medios y el periodismo en el cubrimiento del conflicto armado y de los procesos de paz

Partiremos de la idea de que los medios de comunicación y el periodismo como instituciones sociales y grupos ocupacionales han desarrollado consciente o inconscientemente, sobre la base de su participación activa en el cubrimiento del conflicto armado y de las distintas iniciativas de paz que se han desarrollado en Colombia desde los años cincuenta, una serie de aprendizajes en cuanto a su papel como informadores y constructores de referentes para la comprensión de esos procesos. Han extraído lecciones y realizado balances a veces individuales, a veces colectivos, de su papel en el cubrimiento de los procesos de paz de 1984 y 1985 durante la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), cuando por primera vez la guerrilla logró una amplia visibilidad televisiva y una amplificación de sus idearios y razones de lucha, aún poseedora por esos días de un aura de romanticismo revolucionario y de lucha por el cambio social. Han sacado también lecciones importantes, como lo veremos a conti-

nuación, del reciente proceso de paz de la administración Pastrana con las FARC entre 1999 y el 2002. Probablemente han realizado otros aprendizajes del cubrimiento del ascenso, desarrollo y expansión del fenómeno paramilitar, aunque tal vez éstos son menos claros y menos estudiados y sistematizados. El tiempo transcurrido de negociación con los paramilitares en Santafé de Ralito seguramente está dejándoles nuevas lecciones.

Para que tales aprendizajes tengan un sentido práctico y puedan nutrir el ejercicio de la profesión, así como los programas de formación de periodistas y comunicadores sociales en un sentido anticipatorio de aquello con lo cual se encontrarán en el desempeño de su oficio, ellos deben ser consignados en escritos a través de un trabajo analítico y autorreflexivo sobre las propias experiencias, trabajo que no siempre se lleva a cabo y del cual no siempre se tiene conciencia en una profesión exageradamente volcada

sobre el presente y sobre el ejercicio diario del oficio. Sin embargo, tenemos que reconocer una importante tendencia, presente actualmente dentro de algunos sectores del periodismo colombiano, hacia la realización de investigaciones sobre el desempeño profesional y sobre la práctica de sus medios, que empieza a encontrar un interés y apoyo significativos de la academia de las ciencias sociales.² Varias de las recientes investigaciones en las cuales nos apoyamos para este trabajo son resultado de esfuerzos conjuntos entre académicos y periodistas, y de fructíferos encuentros entre la investigación académica y la investigación periodística. La hipótesis que se desprende de la anterior argumentación es que esos aprendizajes del periodismo han sido posibles en la medida en que a la actitud autorreflexiva y a la decisión de algunos periodistas de incorporarse a la investigación sobre su propio *campo*,³ se ha sumado la apertura de algunos sectores de las ciencias sociales para pensar académicamente el periodismo como objeto legítimo de estudio y de debate ciudadano. La confluencia de estos dos sectores en distintos eventos y proyectos de formación de periodistas que se han desarrollado en los últimos años se ha traducido en el desarrollo de importantes espacios formativos en el campo periodístico en ciudades intermedias y regiones, así

como en algunos avances en cuanto a la vinculación de directores, subdirectores y jefes de redacción, principalmente de prensa escrita, a tareas de formulación y aplicación de parámetros de calidad informativa en su producción noticiosa sobre el conflicto armado.⁴

Agregaríamos a la hipótesis que los aprendizajes se han dado principalmente en el medio escrito, y poco en el medio televisivo que aparece marcada y gravemente preso de la lógica frívola y mercantilista.

Sin ser el objeto central de este escrito, junto a los aprendizajes del periodismo y de los medios a los que aquí se les da prioridad, aparecerán también en el texto algunos aprendizajes de la comunicación del conflicto armado y

2 Sobre las posibilidades de diálogo, de encuentro y de trabajo conjunto entre los saberes periodísticos y los saberes académicos y sus potenciales efectos benéficos sobre la discusión y el conocimiento ciudadanos en torno a la profesión periodística, véase Fabio López de la Roche (2003).

3 En este caso tomamos el concepto de “campo” de Pierre Bourdieu para referirnos al periodismo como esfera de la actividad social con actores, funciones e instituciones especializadas.

4 Nos referimos principalmente al trabajo del Proyecto “Antonio Nariño” para la Libertad de Prensa y al grupo de organizaciones que lo integran, al trabajo investigativo y formativo llevado a cabo por la Corporación “Medios para la Paz”, por la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Friedrich Ebert de Colombia (Fescol), la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y por académicos independientes de distintas ciudades del país.

de la paz realizados por los actores político-militares, los gobiernos y sectores de la opinión pública.

El presente trabajo constituye también un esfuerzo por comprender con algún nivel de complejidad el funcionamiento del sistema de medios masivos y del periodismo en sus articulaciones con el poder político.

La aproximación teórica a las relaciones entre periodismo y conflicto armado utilizada en el presente texto se ubica en una cierta tensión entre una visión que podríamos denominar realista y una visión normativa. Desde la primera, tenemos que reconocer que los medios y el periodismo constituyen un campo de lucha por la definición semántica de la realidad (por posicionar unos significados en detrimento de otros), un campo de intereses y de lucha política de los actores del conflicto por convertir en dominantes sus propias percepciones del mismo. Desde la segunda, tenemos que reconocer que el campo de los medios y del periodismo, en su relación con el tratamiento del conflicto, si bien responde en parte a esas presiones e intereses, no tiene que equivaler a una suerte de “ley del monte”. La lucha político-militar no tiene que llevar necesariamente –ni debe llevar, agregaríamos nosotros–, a la eliminación de los controles externos –sociales e institucionales–,

de las autorregulaciones y de una necesaria ética de la comunicación y la información pública.⁵

Si bien hemos tenido y tenemos hoy dificultades enormes en Colombia para la formulación de una política pública de comunicación que consulte ante todo el interés ciudadano y que escape a las apropiaciones privadas y patrimonialistas de los medios, el país cuenta con una tradición importante de libertad de prensa y de profesionalismo periodístico que, aunque desigual y afectada por los intereses del conflicto y por tradiciones oligárquicas que se resisten a desaparecer y se reencauchan a pesar de los procesos contemporáneos de democratización, de todas maneras ha construido en años anteriores y propone también, hoy, unos valores básicos, unos códigos deontológicos de la profesión que pasan por los debates acerca de la calidad periodística, los equilibrios informativos, la objetividad, el distanciamiento crítico con las fuentes oficiales, la superación del “unifuentismo”, la defensa de la verdad en la construcción de los hechos noticiosos o el compromiso con unos u otros modelos de ejercicio de la profesión

5 Para una visión de las articulaciones entre periodismo, comunicación social e interés público, me baso en Denis McQuail (1998), así como en la propuesta conceptual y de política pública de comunicación esbozada por los distintos autores participantes del libro de Jay G. Blumler (1993).

(el periodista “mediador”, el “imparcial” o el “abogado” por una u otra causa).

El presente análisis toma distancia también de visiones marcadamente instrumentales de los sistemas de medios que los equiparan a especies de “aparatos ideológicos de Estado” (Althusser) o a un mecánico y vertical poder burgués detrás de los *mass media* que ejercería su dominación sin ningún tipo de mediaciones. Sin negar lo que en el sistema de medios hay de dominación, de coincidencia de intereses o de subordinación a las lógicas de los grupos económicos y políticos dominantes o a las del poder gubernamental –al que en buena medida sustentan–, el funcionamiento del periodismo y de los medios masivos está mediado además por tensiones con los poderes políticos y gubernamentales, pero también por eslabones y jerarquías intraburocráticas que procesan la información noticiosa en las empresas mediáticas de acuerdo con criterios profesionales, rutinas e ideologías de la noticia, por procesos de autorreflexión y de autorregulación (muy estimulados en nuestro caso por los debates alrededor del papel del periodismo en el cubrimiento del conflicto armado interno), procesos éstos que le confieren al sistema de medios, y sobre todo a la prensa escrita y a las revistas semanales de información y opinión políticas, una relativa autonomía.

Presentaremos en una primera parte una visión sintética del papel de los medios y del periodismo en el proceso de paz con las FARC entre 1999 y 2002. Especial atención prestaremos a la relación con las fuentes de información acerca de la guerra. Una segunda parte analiza los problemas y riesgos del cubrimiento periodístico del conflicto en el contexto de la seguridad democrática del presidente Uribe y de sus presiones por redefinir semánticamente el conflicto. La escogencia de los dos periodos tiene que ver con que ellos constituyen el marco temporal de desarrollo de los aprendizajes más recientes del periodismo con respecto al cubrimiento del conflicto armado y de la negociación. También el marco histórico-contextual de muchos desaciertos periodísticos que están detrás de los aprendizajes, o que aún esperan ser procesados críticamente para aprender nuevas cosas del propio desempeño en el reciente pasado.

Por falta de espacio no nos detendremos en algunos aspectos estructurales, contextuales y específicamente ocupacionales que afectan el desempeño periodístico y la calidad de la información sobre el conflicto armado interno, aunque en algunos apartes serán mencionados. Los problemas de la concentración de medios, de la crisis económica por ellos vivida y la manera como han afectado a las empresas y al oficio; la

situación social y laboral de los periodistas; sus niveles de formación académica y sus procesos de capacitación y actualización; los relacionados con situaciones de riesgo y amenaza a la vida y, por tanto, con censuras y autocensuras de los periodistas particularmente en las zonas de hegemonía

paramilitar o guerrillera; los asociados con las tensiones y dificultades de articulación de las instancias capitalinas con los niveles regionales para la producción de una información auténticamente nacional, pueden conocerse a través de las investigaciones citadas en este trabajo.⁶

Algunas lecciones y aprendizajes del proceso de paz en el Caguán⁷

La precaria construcción de confianza en la mesa de diálogo

- 6 Sobre la situación laboral de los periodistas en Colombia, véase la investigación de Alejandro Manrique e Iván Cardona (2003). La situación de la libertad de prensa y lo relacionado con violaciones de los derechos humanos de los periodistas puede consultarse en Fundación para la Libertad de Prensa (2004) y en Instituto Prensa y Sociedad (2004). Sobre los procesos de reconversión del sistema mixto de televisión a partir de 1998, y sobre el desarrollo en el medio televisivo de los géneros informativos, de opinión y los del entretenimiento en los nuevos contextos de desregulación y privatización, véase el informe final y especialmente los capítulos 2 y 3 de Leandro Ramos, Jorge Verdugo y Elkin Rubiano (investigadores) y Fabio López de la Roche (asesor) (2004).
- 7 En el desarrollo de esta primera parte retomamos algunas conclusiones de la investigación "Rutinas profesionales y discursos hegemónicos en la información periodística sobre conflicto armado y proceso de paz con las FARC en Colombia durante 1999", financiada por Colciencias y realizada en el IEPRI bajo mi dirección, con la participación como coinvestigadores de Nelson Castellanos y Leandro Peñaranda. La investigación trabajó la construcción noticiosa del conflicto armado y del proceso de paz con las FARC en los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador*, en RCN y Caracol Radio, y en los noticieros televisivos en *Vivo 9:30* y *Noticias RCN* de las 7 de la noche. El periodo escogido fue entre el 31 de agosto y el 31 de diciembre de 1999. El análisis de algunas representaciones y tratamientos noticiosos del conflicto y de la paz en el medio televisivo durante la administración Pastrana se apoya en un corpus de noticieros de cuatro meses, grabados, transcritos y analizados desde la perspectiva del análisis crítico del discurso de medios (ACD).

El cubrimiento del proceso de paz de la administración Pastrana con las FARC (1999-2002) se vio afectado por las heridas, intolerancias y actitudes viscerales que el conflicto armado ha dejado en distintos sectores de la población.

La marcha de las negociaciones en San Vicente del Caguán no generó un proceso de construcción de confianza entre las partes, y entre el propio proceso de paz y su percepción ciudadana, que los medios pudieran recoger, ampliar y consolidar desde sus procesos informativos y de generación de opinión. La falta de reglas del juego claras por parte del gobierno para el manejo de la zona de distensión de San Vicente del Caguán, la sensación de permanentes concesiones por parte del gobierno a la guerrilla con el fin de mantener el proceso, la des-

confianza que suscitaba en la insurgencia la promulgación e impulso por parte de la administración Pastrana del Plan Colombia, así como las actitudes soberbias y los congelamientos reiterados de las conversaciones por parte de las FARC, fueron sólo algunos de los obstáculos a la generación de confianza mutua en la mesa.

Un problema evidente fue la no construcción de una política y un discurso unificados entre el presidente, el comisionado de paz y el sector civil del gobierno participante en la negociación, de un lado, y el estamento militar, del otro. Por el contrario, mientras el poder civil le confería estatus político al interlocutor armado en la mesa de negociación, los altos oficiales militares los calificaban de narcobandoleros, narcoguerrilleros o bandidos, con lo cual el gobierno, a través de esta curiosa comunicación gubernamental en dos canales, enviaba signos confusos y contradictorios a la opinión pública, así como al interlocutor guerrillero en la mesa de negociación.

La guerrilla de las FARC, por su parte, durante los tres años largos del proceso, desperdió periódicos, micrófonos, cámaras, audiencias públicas y otros escenarios participativos como espacios de construcción de una propuesta política seductora, en mediana sintonía con necesidades y reivindicaciones de grupos de la sociedad. Por el contrario, a lo que asistimos fue a un discurso ideológico y acartonado, y a una actitud a menudo soberbia, marcadamente ideológica y militarista.

Problemas de la comunicación de un proceso de paz en medio de la guerra

El proceso de paz durante la administración Pastrana, al no desarrollarse paralelamente a un pacto de cese al fuego, tuvo lugar en medio del conflicto armado. De esa manera, los hechos noticiosos derivados del conflicto bélico (tomas guerrilleras de pueblos, estallidos de cilindros-bombas contra alcaldías y estaciones de policía de municipios, enfrentamientos militares), altamente “noticiales” en virtud de su carácter espectacular y dramático, terminaron a menudo haciendo mucho ruido y opacando la visibilidad de algunos avances y logros en la mesa de negociación, muchos de ellos poco espectaculares en razón de la confidencialidad y discreción propia de este tipo de conversaciones, y visibles sobre todo para el analista juicioso y agudo, el negociador de paz o el experto en resolución de conflictos.

Las Unidades de Paz como un logro periodístico hacia el cubrimiento más estructural de los asuntos del conflicto y de la negociación

Hay que reconocer en este punto los importantes esfuerzos e iniciativas adelantados desde la prensa escrita, particularmente desde las Unidades de Paz de los diarios *El Colombiano*, *El Tiempo* y *El Espectador*, para complejizar y dar fondo histórico a la lectura ciudadana del conflicto, a fin de ofrecer a los lectores elementos de juicio acerca de cómo han sido los procesos de negociación de conflictos armados internos en otras latitudes, y cómo se propiciaron o se dificultaron los procesos de aproximación entre las partes. No sólo entrevistaron a personajes como el señor Villavicencio, negociador en Suráfrica; a comandantes centroamericanos como Ana Guadalupe Martínez; a mediadores europeos y norteamericanos en otros conflictos bélicos, sino que construyendo una relación dialógica con saberes sobre el conflicto armado colombiano menos coyunturales y más históricos y estructurales, acumulados producto de la reflexión académica de universidades e institutos de investigación nacionales, intentaron darle fondo y perspectivas complejas de análisis al ciudadano lector de prensa.

Hay que precisar, no obstante, que las Unidades de Paz generaron tensiones internas fuertes en las redacciones. Miembros de las secciones judiciales o de otras secciones más ligadas al cubrimiento en el terreno del “orden público” las percibieron como aproximaciones demasiado teóricas o “de escritorio” al problema del conflicto armado. No faltaron, en varios medios, las acusaciones de “guerrillero” o de “facho” entre los propios colegas, que evidenciaban el traslado de la intolerancia y la polarización reinante en el país a las salas de redacción.

Ausencia en el medio televisivo de arreglos institucionales orientados a cualificar el cubrimiento del proceso de paz

En notorio contraste con lo que pasaba en la prensa escrita con las Unidades de Paz, los dueños y directores de noticieros televisivos, escenario mediático hegemónico en la construcción de la *visibilidad comunicativa masiva* del proceso de paz, no desarrollaron arreglos institucionales conducentes a un cubrimiento más cuidadoso y equilibrado del conflicto armado, del proceso de paz y de la negociación política.

En esos espacios claves para la orientación de un proceso de reconciliación nacional siguieron predominando el *rating* y el interés comercial sobre el interés nacional y el público. En el cubrimiento del proceso de paz con las FARC desde

los telediarios se impuso un periodismo de relación de hechos de orden público, presentados de manera inconexa y fragmentaria, privilegiando las escenas y situaciones dramáticas y las expresiones de dolor de las víctimas, que abundan en nuestro país y que constituyen hechos altamente “noticiables” desde las lógicas y rutinas ocupacionales de la profesión periodística. No hubo entonces, ni hay hoy día, información sobre las estrategias militares y políticas de los actores de la guerra, sobre sus proyecciones estratégicas en territorios y geografías regionales, sobre los aspectos tecnológicos y propiamente militares del conflicto armado interno, y menos sobre la economía política de la guerra y las maneras como ella explicaría el comportamiento de los actores armados.

En este periodismo televisivo de relación de hechos de orden público inconexos y caóticos no vimos la utilización de mapas del país y de sus regiones para ayudar a los colombianos a comprender el curso diario de los hechos bélicos. Las víctimas de las masacres paramilitares o guerrilleras aparecían muchas veces sin identidades claras, sin nombres ni oficios, como meros datos estadísticos, y las notas periodísticas que cubrían estos actos de terror con frecuencia penetraban poco en los móviles de los hechos y en su ubicación dentro de las estrategias políticas y militares de quienes los cometían.

Causa y consecuencia de este periodismo coyunturalista, dramático y sensacionalista, fue en esos días –y sigue siéndolo hoy– la ausencia en los espacios noticiosos televisivos de una agenda temática propia con una jerarquía de temas y asuntos para el debate ciudadano, formulada desde sus equipos de trabajo y, sobre todo, desde sus directores y jefes de redacción. En ellos desapareció la editorialización, que años atrás estuvo presente en los telediarios, estuvieron ausentes el análisis y la contextualización histórica de la noticia, y en cuanto a los géneros, la crónica, el reportaje o el informe especial tuvieron muy poca presencia.

En una situación de tan fuerte polarización de la opinión ante la negociación como la que caracterizó ese proceso, resultaba por ello mismo mucho más grave la ausencia en los espacios masivos televisivos de opinión e información, de una particular conciencia de las funciones, los roles y las responsabilidades de ese medio en la configuración de los climas de opinión pública hacia el proceso de negociación.

Lo que observamos a menudo durante los tres años largos del proceso de paz bajo la administración Pastrana, fue la toma de partido a favor del Estado, de las

visiones de los empresarios dueños de los medios, y la presencia desmedida de las opiniones de las fuentes oficiales consultadas, reproducidas muchas veces por los medios como si fueran la palabra de Dios.

Ausencia de un seguimiento crítico al proyecto gubernamental de paz

Con respecto a la política gubernamental de paz no hubo un seguimiento crítico y una clara fiscalización por parte de los medios y del periodismo a las acciones y omisiones de quienes la manejaron. Un seguimiento crítico e independiente por parte del periodismo a la conducción gubernamental del proceso de paz tampoco tenía que reducirse, como muchas veces lo hizo, a darle la voz a los críticos de derecha y a los enemigos acérrimos y declarados de la negociación política en los partidos o en el Congreso.

Sin sugerir que estas voces debieron haber sido ignoradas, hay que anotar que la crítica generalmente recayó sobre la falta de voluntad política de la insurgencia para sentarse seriamente a negociar en la mesa (crítica por lo demás válida), pero muy poco se abordaron las insuficiencias y la falta de compromiso del gobierno con un proyecto serio y coherente de paz y de país posconflicto, más allá de la retórica y la indudable buena voluntad del presidente Pastrana. Hacia el futuro quizás pueda ser importante que el periodismo se pregunte por sus niveles de autonomía frente a las políticas gubernamentales de manejo del conflicto armado y de la paz, y sobre la necesidad de construir una agenda propia sobre estos asuntos.

No hubo una crítica a fondo sobre una serie de aspectos que evidenciaban la falta de un proyecto gubernamental conducente a una senda clara de reconciliación nacional: la ausencia de un proyecto reformista que atacara las condiciones estructurales que alimentan la insurgencia en áreas campesinas deprimidas y zonas de colonización; la falta de garantías para la actividad sindical, periodística, judicial, para la política de oposición o de defensa de los derechos humanos, en un país con el más alto índice de asesinatos de líderes sindicales y periodistas en el mundo (¿quién se iba a embarcar seriamente en un proceso de paz sin garantías para la vida y la seguridad personal y familiar?); la carencia de liderazgo con respecto a una reforma política de fondo; la fragmentaria representatividad social de los negociadores gubernamentales; las tensiones permanentes entre el ejecutivo y el estamento militar alrededor de la política de negociación y de la zona de despeje; la falta de una política militar unificada y de consensos y acuerdos entre el poder civil y el estamento militar alrededor de un discurso único y una política coherente y estratégica de paz.

Seguramente esta falta de problematización del proceso de negociación y de las complejas tareas sociales y gubernamentales necesarias para obtener la paz contribuyó también a sembrar en la opinión pública un cierto facilismo y unas expectativas falsas sobre la paz como algo fácil y rápido de lograr. Hacia el futuro habría que evitar la creación de esas expectativas facilistas y ayudar a la opinión a construir visiones complejas de los senderos de la reconciliación. De lo contrario, seguiremos como opinión pública fluctuando de manera ciclotímica entre la euforia y el desencanto con la paz, sin una capacidad de aprender colectivamente de las experiencias del pasado.

Los riesgos del sensacionalismo melodramático en el cubrimiento del conflicto y de la paz

Otro problema en el cubrimiento informativo del conflicto, presente sobre todo en la televisión, pero también en los otros medios, tuvo que ver con la puesta en escena sensacionalista y melodramática del conflicto y la negociación en los formatos de opinión. Los géneros de opinión en los espacios televisivos, los cuales debieron haber ofrecido a la sociedad elementos de juicio para digerir la complejidad de la negociación en medio de la confrontación militar, y haber dado fondo, contexto histórico y comparativo internacional a sus audiencias, optaron muchas veces por el sensacionalismo y el melodrama en la escogencia de sus temas y maneras de abordar el proceso de paz, de negociación y de situaciones conexas con él, como el secuestro de niños por la guerrilla o la muerte –afectado por un cáncer– del niño Andrés Felipe, sin poder ver a su padre, un oficial retenido por la guerrilla.

Esos hechos noticiosos, que por supuesto no podían dejar de ser abordados por los medios y el periodismo, muchas veces fueron asumidos como verdaderas cruzadas mediáticas sin medir los efectos contraproducentes de esas campañas con respecto a los fines buscados (la liberación de los niños secuestrados o del padre de Andrés Felipe), y los potenciales impactos negativos sobre los climas de opinión y estados de ánimo de la población con respecto al apoyo a la negociación de paz.⁸

El cubrimiento noticioso de este tipo de situaciones mostró la dificultad del periodismo colombiano para trascender la reacción visceral inicial y de sentido común condenatoria de la

8 Sobre el cubrimiento del caso del niño Andrés Felipe véase la opinión del analista mexicano Carlos Monsiváis, invitado como ponente central a la conferencia internacional “Los medios informativos en peligro”, organizada por la Asociación Mundial de Periódicos (WAN), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Diarios Colombianos (Andiarios) el viernes 22 de marzo de 2002 en Bogotá, en Monsiváis (2002).

insurgencia, y avanzar hacia el logro de una mayor capacidad de interpelación crítica y argumentada a las acciones de la guerrilla.

En este sentido, los medios tienen que tener cuidado con las pasiones y los estados de ánimo que propician y alimentan con sus mensajes y puestas en escena de los conflictos. Ya los propios abusos de la insurgencia (extorsión, secuestros, boleteo, asesinatos o muertes de secuestrados en cautiverio) han creado por sí solos en sus víctimas y familiares dolores, actitudes visceralmente antiguerrilleras o intenciones de retaliación y de venganza.

Tratamientos de sucesos informativos como el caso del niño Andrés Felipe, convertido en una verdadera cruzada, y otros similares que se construyeron desde los medios masivos durante los tres años largos del proceso, mostraron dificultades en el periodismo para trascender cierta lógica primaria de condena y de juzgamiento mediáticos al interlocutor guerrillero, comunicativamente bastante ineficaz para las necesidades de acercamiento entre las partes y de avance de la negociación.

En cuanto al papel del periodismo en la interpelación crítica a la insurgencia en medio de una negociación política –y esto es conveniente tenerlo en cuenta hacia el futuro cuando soplen de nuevo vientos de paz y de negociación–, requerimos trascender la acusación muchas veces moralista y facilista, desde un cierto sentido común elemental y básico de condena al guerrillero, para configurar una *capacidad de interpelación ética y política* al accionar insurgente que, antes que condenarlo, le siembre cuestionamientos y dudas en torno a su militarismo, la falta de visión política en sus relaciones con la población, sus cercanías con la delincuencia común, sus rigideces ideológicas y anacronismos doctrinarios, y le ayude a acercarse a una comprensión fresca y menos acartonada de este país: de sus nuevas generaciones, sus valores, dilemas e ideales; de la complejidad cultural y política de los contextos urbanos y metropolitanos; de las transformaciones en el plano internacional, etcétera. Interpelación inteligente, que supone diálogo y respeto por el otro, y no simplemente acorralamiento o la lógica del ajuste de cuentas a la hora de la entrevista al líder insurgente.

La lucha por la definición simbólica de la zona de despeje como “laboratorio de paz” o “guarida de delincuentes”

La zona de distensión y su caracterización como “laboratorio de paz” o como “guarida de delincuentes” fue otro de los temas álgidos alrededor del cual se

dio una verdadera guerra de versiones informativas y desinformativas. Las fuentes militares y policiales, presas de su comprensible animadversión hacia su enemigo, pero también de sus ligerezas retóricas, metieron permanentemente goles informativos que incidieron (adicional a los abusos cometidos efectivamente por la insurgencia de las FARC en la zona de despeje) en el desprestigio del Caguán y en la apreciación negativa por parte de la ciudadanía de la marcha de las conversaciones y del mantenimiento de la zona de distensión.

El caso más grave fue el del asesinato en Simijaca, el lunes 15 de mayo de 2000, de doña Elvia Cortés con un “collar-bomba” ajustado a su cuello por parte de delincuentes comunes, como posteriormente se estableció, donde sobre la base de la imputación apresurada de ese crimen a las FARC por el comandante de la Policía Nacional, el general Rosso José Serrano y por altos oficiales militares, imputación recogida acriticamente por el conjunto de los medios de comunicación y por el presidente Pastrana, el gobierno canceló provisionalmente una importantísima audiencia con delegados internacionales programada dentro de las conversaciones de paz, y el proceso de diálogo se vio afectado gravemente en sus posibilidades de continuar, por los impactos desfavorables a la negociación que esta noticia tuvo en la opinión pública.⁹

Evaluando el caso del collar-bomba seis meses después de los hechos, el negociador oficial, Fabio Valencia Cossio, planteó en estos términos el impacto negativo jugado por ese falso hecho informativo en el curso de la negociación: “Vino el collar-bomba. Hubo un error del Estado, mucha precipitud de las autoridades policiales y militares en el señalamiento de los responsables. Ese fue un rudo golpe para las FARC, que después se devolvió contra el Estado. A partir de allí las FARC endurecieron mucho su posición” (Valencia Cossio, 2000).

En una revisión atenta de cualquier archivo noticioso televisivo de los tres años largos del proceso de paz con las FARC podemos encontrar numerosos y variados ejemplos de distorsiones a la información y a la verdad de los hechos, derivadas de la ideología y de los intereses estratégicos de los militares y jefes policiales. En el desarrollo del conflicto armado y del proceso de paz con las FARC durante el año 2000 vimos graves casos de ligereza informativa del medio noticioso televisivo, ligados a la no confirmación de la información inicial brindada por la fuente militar o policial. En el cubrimiento de la toma

⁹ Sobre estos impactos negativos, las reacciones de la opinión a la noticia del “collar-bomba”, así como las movilizaciones estudiantiles de condena a las FARC y la atmósfera de consternación ante la barbarie guerrillera que presidió el entierro de doña Elvia en Chiquinquirá, reacciones todas suscitadas por este falso suceso informativo, pueden consultarse los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador* de los días 17 y 18 de mayo de 2000.

de las FARC a la población de Arboleda (Caldas), Noticias RCN presentó –recurriendo una vez más aventuradamente al condicional “habría”, y sobre la base de la información no contrastada ni confirmada de un alto oficial de la policía– la versión, aparecida en los titulares del teletinformativo, de que “los guerrilleros *habrían* jugado fútbol con las cabezas de los policías”. Otras versiones militares endebles y mal sustentadas que luego tuvieron que rectificarse fueron las del comandante de la Fuerza Aérea, general Héctor Fabio Velasco, sobre el supuesto desembarco por parte de un avión ruso de un cargamento de armas para las FARC en la zona de distensión;¹⁰ la supuesta muerte del Mono Jojoy¹¹ anunciada por un oficial del ejército quien argumentó que tenía información fidedigna y detallada de que el líder de las FARC había sido asesinado por un guerrillero a quien el Mono Jojoy le habría quitado la novia; y la aseveración de un comandante de brigada a un noticiero en términos de que una avioneta que aterrizó una madrugada en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali venía de transportar droga desde la zona de despeje, versión que fue desmentida en la misma emisión por el propio comandante de la Fuerza Aérea, general Héctor Fabio Velasco, quien afirmó que se había establecido que la aeronave venía de dejar un cargamento de droga en Guatemala.

Tal vez refiriéndose a la falta de vocerías claras en las fuerzas militares, a la proliferación de declaraciones de comandantes de brigada y otros oficiales de menor rango de aquellos días, y a este tipo de informaciones aventuradas por no ser confirmadas, que luego tienen que rectificarse o que muchas veces no se rectifican y terminan sembrando en la opinión sombras de duda sobre la confiabilidad de las versiones de la fuente militar, un experto extranjero en temas de comunicación pública y gubernamental afirmaba en un evento sobre medios de comunicación y fuerza pública que “los militares colombianos hablan mucho y hablan muchos”.¹²

Camilo Gómez, Comisionado de Paz del gobierno Pastrana desde comienzos del año 2000 hasta el cambio de gobierno de agosto de 2002, expresaba en una entrevista en el mes de julio del mismo año, refiriéndose a las realidades y ficciones interesadas alrededor de la zona de despeje, que “la zona de distensión no era un paraíso pero tampoco era el infierno que muchos quisieron hacer creer” (Gómez, 2002).

10 Véase el noticiero *En Vivo 9:30*, emisión del jueves 14 de octubre de 1999 y *Noticias RCN*, emisiones de las 7:00 y las 9:30 de la noche del mismo día.

11 El “Mono Jojoy” es el pseudónimo o alias del comandante de las FARC Jorge Briceño.

12 Foro “Medios de comunicación y fuerza pública”, apuntes personales, Paipa, noviembre de 2001.

La relación con las fuentes: la fuente militar

Para concluir esta primera parte abordaremos la cuestión de la relación del periodismo, los medios y los periodistas individualmente considerados, con las fuentes militares oficiales y las extrainstitucionales. Las cuestiones que abordaremos en estos dos últimos apartes no constituyen problemas exclusivos del periodo de gobierno de Pastrana, sino que trascienden hasta nuestros días. Los estudios sobre el periodismo en Colombia y el trabajo formativo en el ámbito de asociaciones como “Medios para la Paz” e iniciativas como el Proyecto “Antonio Nariño” para la Libertad de Prensa, insisten en los últimos años en la necesidad de trabajar no sólo con los periodistas en la cualificación de su ejercicio profesional, sino también con las fuentes, y con la calidad y veracidad de la información que ellas aportan.

Hay numerosas evidencias, como se desprende de recientes investigaciones, de una fuerte actitud de desconfianza de amplios sectores del periodismo hacia la información aportada por la fuente militar y policial, pero también de temor hacia acciones y procedimientos de estos estamentos eventualmente atentatorios contra la seguridad física y la vida de los periodistas:

Las fuentes oficiales no gozan de mucha credibilidad entre los periodistas. Muchos reporteros aseguran que la Policía y el Ejército acomodan resultados, que mienten y se contradicen. Agregan que en muchas ocasiones dichas fuentes por publicar un “positivo” (es decir presentar notas de reconocimiento sobre operativos exitosos) suministran informaciones falsas. La investigación logró comprobar también casos de amenazas a periodistas por publicar notas o denuncias que obstaculizaron el ascenso de grado de un militar. Un periodista entrevistado se atrevió a decir: “Nunca se interponga en la carrera de un militar, si quiere permanecer vivo” (Gómez y Velásquez et al., 2003: 15).¹³

En otro trabajo de investigación sobre la situación del periodismo podemos leer que:

tal vez la fuente que representa mayores dificultades para los periodistas es la militar. De parte de los militares hay una demanda constante para que los periodistas estén de su lado, pues ellos representan a la institucionalidad. Si el periodista toma distancia suele ser *castigado* y no se le brinda información (Rincón y Ruiz, 2002: 108).

13 En esta misma publicación véanse otros testimonios sobre la percepción que tienen los periodistas de la fuente militar y la fuente policial, pp. 15-16.

En los últimos años se han venido dando importantes aproximaciones entre el estamento militar y el periodismo con miras dialogar sobre sus distintas visiones y expectativas sobre la comunicación y el trabajo periodístico, así como para facilitar la producción de una información verídica y confiable sobre el conflicto armado. El documento conjunto suscrito entre periodistas y fuerza pública, producto de la última reunión de noviembre de 2004, consigna, entre otras ideas, la importancia de cómo “ser conscientes de que periodistas y fuerza pública tienen intereses y agendas distintos y responden de distinta manera ante el público es básico para la generación de un diálogo productivo entre los dos sobre el tratamiento de la información sobre el conflicto”. Otro aparte del documento argumenta que:

tanto fuerza pública como periodistas sufren presiones para entregar resultados (presentación de positivos para la fuerza pública, entrega de noticias para el periodista). Esto afecta la calidad de la información, siendo con frecuencia fuente de errores y noticias poco veraces o inexactas de parte de los periodistas o de información no fundamentada por parte de la fuerza pública (Tercer Seminario-Taller “Fuerza pública y periodismo en una sociedad en conflicto armado”, 2004).

Es importante destacar también los acuerdos y las sugerencias adoptadas a finales de abril de 2004 en el seminario “Calidad de la información sobre el conflicto armado en Colombia”, que reunió en Cartagena a los directores de once diarios y dos semanarios, bajo la convocatoria de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, la Fundación Konrad Adenauer y el Proyecto “Antonio Nariño”. En ese seminario se reconoció autocríticamente que “la relación con las fuentes a veces es perversa”, y que “se publican muchas informaciones con una sola (oficial) o con igual punto de vista”. Se propuso así mismo, “a las Fuerzas Armadas y otras fuerzas institucionales como la Presidencia, abrir un diálogo, no sólo sobre la responsabilidad de los medios en la información sobre el conflicto, sino sobre la suya propia como generadores de información”. Allí también se acordó la adopción de unas “Recomendaciones básicas para el cubrimiento del conflicto armado” relacionadas con:

cuidado en el uso del lenguaje; contextualización de las noticias; mayor empleo de géneros como el reportaje y el análisis; consulta regular con expertos; esfuerzo por aumentar el número y la diversidad de fuentes; dedicar al conflicto sólo periodistas

experimentados, y reforzar y mejorar las actividades de formación y las condiciones laborales y de seguridad de los corresponsales regionales.¹⁴

14 Editorial “El conflicto y la prensa”, *El Tiempo*, lunes 3 de mayo de 2004, pp. 1-18. Véase también la nota informativa “Llamado de la prensa a FF.AA.”, *El Tiempo*, lunes 3 de mayo de 2004, pp. 1-6.

No sobra recordar que otros problemas del trabajo con la fuente militar oficial tienen que ver además con los riesgos de la especialización en dicha fuente, que se traducen con frecuencia en periodistas amigos íntimos e incondicionales de la alta oficialidad, que transmiten sus boletines de prensa o sus videos institucionales sin ninguna digestión crítica o sin ninguna edición, y desde la creencia que la voz oficial es la voz de la verdad. Similares actitudes ocurren también, como lo veremos a continuación, con las fuentes extrainstitucionales.

La relación con las fuentes militares extrainstitucionales: la guerrilla y los paramilitares

Una de las conclusiones a que se ha llegado en varios grupos de reflexión sobre el manejo periodístico del conflicto es la necesidad de trabajar, por lo menos en las coyunturas de paz y de negociación, cuando se pueden concertar algunas reuniones entre actores armados extrainstitucionales y periodistas, aspectos orientados hacia la comprensión por parte de esas fuentes ilegales (grupos guerrilleros, paramilitares), de la profesión periodística, de su deber ser y de su funcionamiento, así como hacia el respeto de su independencia y profesionalismo. Directores de medios, jefes de redacción y periodistas se reunieron en el Caguán con la guerrilla de las FARC durante el proceso de paz con Pastrana, y también en Santafé de Ralito con los paramilitares, en medio del proceso de negociación con esos grupos promovido por el presidente Uribe.

Algunos analistas pensamos que estos diálogos con la insurgencia tienen mucho sentido con miras a posibilitar aproximaciones hacia futuros procesos de paz y hacia progresivos descubrimientos de la opinión pública que los grupos armados deben necesariamente hacer si aspiran a comprender el país, la sociedad colombiana y su complejidad, y a participar algún día de un proceso de incorporación a la vida civil y de renovación de la experiencia política nacional.

Independientemente de estas reuniones el periodismo ha venido sacando conclusiones, unas más elaboradas, otras menos, del cubrimiento del proceso del Caguán y de su papel en la construcción de las representaciones mediáticas de los paramilitares (entrevistas a Carlos Castaño de Claudia Gurisatti y de Darío Arizmendi, cubrimiento del proceso de Ralito, etc.). Una de las lecciones de los medios y el periodismo en el Caguán es la de no dejar reporteros permanentemente en la zona de negociación, para evitar las familiaridades mal manejadas con la fuente guerrillera (ahora con la zona de Ralito también con la fuente paramilitar), así como la conveniencia de rotar a los distintos reporteros de un medio en el cubrimiento de la negociación.

Varias investigaciones sobre el periodismo en Colombia muestran interesantes procesos autocríticos sobre relaciones o compromisos indebidos establecidos por los periodistas con las fuentes paramilitares o guerrilleras, tales como hacer promesas, imposibles cumplir, de publicarles comunicados, o entrar en relaciones de amistad muy estrechas con ellos sin el mantenimiento de la necesaria distancia crítica que se debe tener en el oficio en el cubrimiento de éste y otro tipo de fuentes. Las historias de vida o los talleres de capacitación han permitido revisar cubrimientos realizados y detectar equivocaciones y fallas éticas producidas en situaciones inéditas en el trabajo de campo del periodista para las que no siempre preparan los directores y jefes de redacción, como tampoco las escuelas de periodismo y comunicación.

Problemas y riesgos del cubrimiento periodístico del conflicto en el contexto de la seguridad democrática del presidente Uribe

Del inicial entusiasmo –muchas veces acrítico– y el posterior desencanto con la negociación de paz durante Pastrana, el país parece haber pasado con el gobierno de Uribe Vélez al entusiasmo acrítico con la guerra y la ofensiva militar antiguerrillera.

Los primeros 18 meses de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez estuvieron marcados, en cuanto a su cubrimiento por el periodismo y los medios masivos, por un unanimismo prouribista acrítico, entusiasta y sin fisuras. Precisaremos algunos de los factores que condujeron a la configuración de ese respaldo mediático incondicional, que en parte expresa el apoyo ciudadano a la política de seguridad democrática de Uribe Vélez, pero también tendencias gubernamentales y periodísticas conducentes a la manipulación y homogeneización de la opinión. Mostraremos algunos de

los problemas que generó y los que pueden generar hacia el futuro intentos similares de homogeneización ideológica y mediática de la opinión, que refuerzan viejas tradiciones de sectarismo y de intolerancia presentes en la cultura política colombiana.

Si bien no nos detendremos en el análisis del hundimiento del referendo progubernamental del 25 de octubre de 2003, ni tampoco en el triunfo electoral de Luis Eduardo Garzón en la Alcaldía de Bogotá y del Polo Democrático Independiente (PDI) en otros departamentos y capitales departamentales en las elecciones a alcaldías y gobernaciones del 26 de octubre del mismo año, sí queremos destacar el papel jugado por esos dos hechos político-electorales en un cierto resquebrajamiento del unanimismo prouribista.

El unanimismo prouribista como expresión de un conjunto complejo de factores mediáticos y no mediáticos

Este unanimismo mediático prouribista no ha sido, sin embargo, un simple resultado de la adhesión ideológica de dueños y directores de medios a la figura y la política del presidente, incluso si reconocemos que ese tipo de respaldo efectivamente se ha dado. La actitud de los medios, más allá de una posible lectura explicativa en términos de manipulación mediática, expresa una conjunción compleja de factores. De un lado, se alimenta del deseo de orden, no sólo de grupos medios y altos de la población, sino de amplios sectores populares que, hastiados con los abusos y las prácticas delincuenciales de la insurgencia armada (secuestro, extorsión, pescas milagrosas en las carreteras, acciones

terroristas), y desencantados con la mala conducción del proceso de paz por la administración Pastrana, y por la arrogancia y soberbia de las FARC a lo largo de esos tres años largos de conversaciones de paz, encuentran en la actitud firme y decidida del presidente Uribe ante la guerrilla, una postura inédita y valiente, digna de ser respaldada. Hay que tener en cuenta también que los resultados de las encuestas que han mostrado un alto y relativamente estable apoyo ciudadano a la gestión gubernamental que ha fluctuado alrededor de un 70% de favorabilidad, han tenido que ser consideradas por las líneas editoriales y las titulaciones de la noticia a la hora de informar sobre las acciones de la política gubernamental.

El indudable liderazgo del presidente Uribe amplificado por la televisión

La actitud prouribista de los medios expresa también un indudable liderazgo del presidente Uribe, luego de dos periodos presidenciales bastante mediocres, confusos y cuestionados como fueron los de Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002). Coherente en la práctica con su lema de “trabajar, trabajar y trabajar”, al presidente se le percibe como un hombre laborioso, austero y crítico del despilfarro de los dineros públicos. Su puesta en escena

con sombrero y poncho campesinos en sus salidas a las regiones, y su presencia activa en la conducción de los consejos comunitarios de los fines de semana, transmitidos por la televisión pública, han generado también la imagen de un presidente apersonado de la conducción del país, independientemente de la eficacia de esos consejos y de la traducción a decisiones de política de las agendas y las decisiones que allí se adoptan o se sugieren:

El contenido televisivo se concentra en mostrar a un mandatario amable y bien intencionado, que les permite a camarógrafos y reporteros gráficos registrarlo nadando en San Andrés, trotando en Arauca, montando a caballo en su tierra con una taza de café en la mano, o con sombreros campesinos de todas las regiones del país. Oportunidades que ningún fotógrafo dejaría pasar y que ningún editor dejaría de publicar. Uribe vende: en sus dos años de gobierno ha aparecido en la carátula de *Semana* 26 veces, y 14 en la de *Cambio*. (...) Eso sin hablar de la presencia sabatina del telegenico mandatario en los célebres

consejos comunitarios. Doce o catorce horas seguidas en TV, para hablar con la gente sobre sus asuntos más cercanos. En cambio, la defensa pública de los temas complejos y polémicos –que a veces son los grandes asuntos de Estado– se los deja a los ministros. Cultivar la imagen no tiene nada de malo. Es parte de una concepción moderna del poder, fortalece la gobernabilidad y es una fuente de liderazgo. Pero así como ha habido presidentes exitosos –un Clinton por ejemplo– que han logrado en forma simultánea popularidad y buen gobierno, sería un error considerar que ambos términos son sinónimos.¹⁵

La titulación de la noticia desde la lógica del deseo de ganar la guerra

El apoyo a la política de seguridad democrática del presidente Uribe por parte de los dueños y de los directores de los grandes medios de comunicación se ha traducido en una titulación de la noticia, tanto en la prensa escrita como en los medios audiovisuales, que opera desde el deseo de ganar la guerra contra la guerrilla, y no siempre desde una evaluación fría y cuidadosa de las realidades en el campo de la confrontación militar entre las fuerzas oficiales y la insurgencia armada. La entrega de un supuesto comandante de frente de las FARC en la costa Caribe a comienzos de 2003 fue presentada al día siguiente por el diario *El Tiempo*

desde un titular de primera página que aludía al hecho como al “inicio de la desbandada”. En entrevista con la periodista Darcy Quinn en su programa *Lechuza*, directamente desde el Ministerio de Defensa, el supuesto comandante de frente confesaba que tenía mando sobre 20 hombres. Uno se pregunta si esa unidad, que equivaldría más precisamente a un pelotón, podría denominarse “frente guerrillero”. No deja de ser curioso que el guerrillero capturado cuatro o cinco días antes de su presentación pública, apareciera en rueda de prensa oficial junto al presidente Uribe, justo el día en que un grupo de ex presidentes hacía pública una propuesta para el intercambio humanitario de rehenes en manos de la guerrilla, por guerrilleros presos.

15 “¿Popularidad para qué? Ningún presidente había convertido en prioridad gubernamental el cultivo de su propia imagen”, *El Tiempo*, jueves 12 de agosto de 2004, pp. 1-23.

“Colombia vive, viaja por ella” y el patriotismo prouribista

La campaña “Colombia vive, viaja por ella”, política de organización del desplazamiento entre distintas capitales departamentales de caravanas de vehículos particulares durante los “puentes” festivos, Semana Santa y vacaciones de fin de año, con el fin de garantizar la seguridad de los viajeros y evitar “pescas milagrosas” y secuestros de parte de la guerrilla, ha contribuido también, paradójicamente, al unanimismo y triunfalismo prouribistas.

En un país donde la gente acostumbra viajar durante los “puentes” o festividades en plan de visita familiar o de turismo a distintas ciudades y regiones, y donde a partir de 1997 la pérdida de control de las vías por parte de las autoridades había llevado a que muchos individuos y familias se abstuvieran de viajar por la amenaza de un posible secuestro guerrillero con

finés extorsivos, la iniciativa gubernamental ha encontrado un fuerte y significativo respaldo ciudadano. Lo curioso y preocupante es que de ese respaldo espontáneo y comprensible a la política de recuperación de las vías se ha pasado a un singular patriotismo oficialista clasemediero, estimulado por los medios y especialmente por la televisión, no exento de ingenuidades y de ciertos sesgos clasistas para quienes parecen reducir la seguridad democrática a “Colombia vive, viaja por ella”. Ese patriotismo oficialista no sólo banaliza la cuestión de la seguridad democrática sino que intenta alinear a la población de manera incondicional alrededor de la política gubernamental de Uribe. El mensaje preferencial sería: “dado que el presidente está mostrando resultados en su política contrainsurgente, al presidente no se le puede criticar”.

Concentración económica de los medios y unanimismo

El unanimismo generado por la política de Uribe y por la manera como los medios la han amplificado y, de alguna manera, convertido en voz canónica incontrastada, se refuerza por los procesos de concentración. La privatización desde 1998 del sistema mixto de televisión ha llevado a la reducción de voces y opiniones, por

los procesos de apertura del sector al capital privado adelantados sin reglas claras de preservación de la diversidad en la propiedad económica, así como en lo político, lo social y lo cultural. La monopolización de la televisión a nivel nacional por los dos grandes grupos económicos, RCN y Caracol, ha jugado un papel determinante en la

promoción de un apoyo acrítico y del unanimismo de amplios sectores de la opinión alrededor de la figura del presidente Uribe.¹⁶ Los noticieros más críticos y más elaborados, como *Noticias Uno* y *CM&*, orientados hacia estratos altos y más o menos cultos políticamente, se ubican en un canal público de menor sintonía, el Canal Uno, el cual ha sido afectado por el deterioro de la red pública de transporte de la señal abierta de televisión, pero también por el traslado de la pauta publicitaria de los canales públicos a los privados.

En cuanto a la prensa escrita, luego de la desaparición de *El Espectador*, diario centenario de fuerte raigambre democrática, convertido hoy en un semanario y adquirido por el grupo Santodomingo, el diario *El Tiempo* goza del monopolio de los lectores en tanto único diario de circulación nacional y medio clave en la formación de la opinión de los públicos letrados y de la burocracia estatal y privada.

Si bien el periódico *El Tiempo*, en virtud de su situación monopólica en tanto único diario de circulación nacional, causa necesariamente efectos homogeneizantes de la opinión ante muy diversos temas, la posición de este diario ante la figura y la política del presidente Uribe, a diferencia de los canales televisivos, mucho más monolíticos y uniformes –sobre todo los privados– es dual, y se mueve entre el apoyo decidido de la política de seguridad democrática de Uribe y el apoyo en general hacia las instituciones, muy claro en situaciones de riesgo o amenaza para las mismas, y la crítica argumentada, en ocasiones bastante fuerte, de los excesos y abusos de la seguridad democrática como las detenciones masivas y arbitrarias, pero también de decisiones y acciones en otros frentes de la acción gubernamental, que el medio considera desacertadas e inconvenientes. Por ejemplo, el lector puede evidenciar cómo en este texto, para la construcción de algunas de nuestras argumen-

16 Véase la página entera de *El Tiempo*, del 20 de julio de 2003, Día de la Independencia, pagada por una serie de instituciones como Avantel, Fedegán, Banco Superior, Efectimedios, Medios Alternativos, Toro Fischer América Comunicación Total, y RCN Televisión y Caracol Noticias, apoyando la “marcha cívica de apoyo a nuestras instituciones y a nuestra Fuerza Pública”, convocada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional. La página, titulada “Reviviendo el 20 de Julio. La nueva gesta Libertadora: liberar a Colombia de la tiranía de los terroristas y de los delincuentes”, mezcla visualmente una imagen inicial de cuatro manos unidas, dos de ellas vestidas de traje masculino con camisa elegante a rayas, seguramente significando las manos del presidente Uribe; una imagen pictórica clásica de Bolívar y Santander junto a otros próceres de la patria sobrepuesta sobre otra imagen de diseño post de la bandera de Colombia en una especie de jirón de tela tricolor; la invitación a la marcha cívica ¡Ponte la bandera y camina por Colombia!, puesta en letras blancas sobre los colores de la bandera; y un texto escrito que, entre varios párrafos, incluye éste como mensaje preferencial: “Hoy tenemos ante nosotros los desafíos del futuro promisorio. Seguridad democrática y protección para todos nuestros habitantes basados en el fortalecimiento del Estado de derecho. Son los mismos principios de 1810”. Este texto, buen ejemplo de los usos político-publicitarios de la historia, es también un buen ejemplo de la toma de partido y la posición política de RCN y Caracol de apoyo total al gobierno Uribe y sus políticas.

taciones, nos hemos basado en varios editoriales de *El Tiempo*, críticos de medidas y posiciones del gobierno o del mismo presidente.

Hay que anotar en general que la información en Colombia –y sobre todo la que va por los grandes canales radiales y televisivos para públicos masivos– es objeto de presiones no sólo de parte de los actores de la guerra sino también de otras demandas resultantes de los entrecruzamientos de intereses y de percepciones entre políticos, empresarios, y dueños y directivos de medios de comunicación. Como bien lo observa una analista del periodismo en una reflexión acerca de para quién escribe el periodista,

el ejercicio de pensar en los lectores que manejan *el poder* suele desembocar en una suerte de autocensura, no sólo para no poner en peligro su integridad física, sino porque con frecuencia los directivos de los medios tienen más empatía con las fuentes –militares, políticas o empresariales– que con sus periodistas, y en no pocas ocasiones basta la llamada de un personaje prestante a la jefatura de un diario para que se pongan en peligro la credibilidad del periodista y su integridad (Ruiz, 2002: 105).

Hay que hacer algunas precisiones sobre el unanimismo gobiernista de los medios. Mientras la opinión crítica del gobierno aparece ante todo en medios de acceso relativamente restringido a públicos letrados (*El Tiempo*, la revista *Semana*, *El Nuevo Siglo*), y particular-

mente en algunos editoriales y en las columnas de opinión, los grandes medios parecen cuidarle la espalda al presidente Uribe sobre todo en lo que respecta a la información noticiosa.¹⁷ Coincido en ese sentido con la visión de Rodrigo Pardo, quien en agosto de 2004 observaba que:

Hay críticas en el periodismo de opinión (es la naturaleza de su función), pero (...) en la información propiamente dicha al actual gobierno lo tratan con una gran generosidad. Mientras la mayor parte de los periódicos cuestionan la reelección inmediata (...) y muchos columnistas cuestionamos temas puntuales (que suelen provocar apasionados señalamientos de antipatriotismo), el registro de las noticias suele ser muy benévolo con el poder. En especial, el de la televisión. Medio que, según reciente encuesta de Invamer-Gallup provee la información a un 70% de los ciudadanos. Las cadenas nacionales –Caracol y RCN– dedican muy poco espacio para el debate, la crítica y la opinión.

17 Véase, por ejemplo, cómo se minimizan a través de su ubicación en el diario, las críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la política gubernamental de derechos humanos en las ediciones de *El Tiempo* de los días 13 y 14 de abril de 2005. Ad portas de pronunciarse la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación colombiana, en su edición del miércoles 13 el periódico envía al segundo cuadernillo, concretamente a la sección de “Información general” (pp. 2-9), una información que desde nuestra perspectiva debiera aparecer en primera página. Mientras tanto, la primera página abre con una fulgurante fotografía a todo color del campo del juego entre el Milán y el Inter incendiado por las bengalas lanzadas por los hinchas interistas. La fotografía se titula “Ayer ardió Roma”. En el índice de secciones y contenidos del diario ubicado en la primera página, el cual está llamado a orientar al lector en su exploración del periódico, no se incluye ninguna referencia a la ubicación interna de esta importante noticia.

Los positivos esfuerzos que significan la nueva franja de RCN [se refiere tal vez a *Primera línea* de Álvaro García] y programas como *Lechuza* y *Hablando claro*, de Caracol, salen al filo de la medianoche. Y los noticieros más analíticos e independientes –*CM&* y *Noticias Uno*– aparecen en los canales de menor audiencia.¹⁸

En la misma dirección, Germán Rey ha anotado recientemente que:

en el debate público existen inquietudes sobre un posible giro de los medios en la representación del conflicto íntimamente relacionado

con los cambios de la política gubernamental. Las inquietudes surgen sobre lo que los medios cuentan y dejan de contar, sobre los énfasis que colocan, los protagonistas que ubican en el centro de sus noticias, los temas que reciben mayor cobertura y atención (Rey y Bonilla et al., 2004).¹⁹

Otro reciente análisis de la relación entre los medios y el conflicto ha llamado la atención acerca de cómo “hay voces o corrientes de opinión que no se escuchan mientras otras, a veces, se escuchan demasiado a través de los medios de opinión” (INDH, 2003: 427).

Institucionalización y centralización de la información sobre el conflicto en la Presidencia de la República

Si recordamos el manejo caótico de la información, las frecuentes declaraciones enfrentadas o contradictorias de voceros civiles y militares gubernamentales durante Pastrana—algunas de las cuales hemos mostrado—, seguramente tenemos que reconocer los avances en la institucionalización de la información sobre el conflicto durante el gobierno Uribe.

Comentando los datos de un estudio-monitoreo de doce diarios y un semanario de distintas ciudades del país, y el primer lugar que en él obtiene el gobierno en tanto fuente del conflicto armado (25%, seguido de fuerza pública con 15% y sociedad civil con 14%), Germán Rey se ha referido a estos correctivos introducidos por Uribe en la comunicación gubernamental, anotando que “es posible que la alta concentración en la Presidencia se deba a una estrategia intencional del gobierno que ya desde sus inicios mostró su preocupación por la enorme fragmentación del manejo de la información sobre el conflicto que existía en las institu-

18 Rodrigo Pardo, “Popularidad para qué? *El Tiempo*, jueves 12 de agosto de 2004, pp. 1-23.

19 Sobre la observación de Rey precisaría que esas inquietudes que él afirma que están en el debate público, de verdad están lejos de estarlo, y que somos más bien algunos círculos de analistas de la comunicación y el periodismo y algunos observadores atentos de los medios en nuestros restringidos espacios comunicativos, los que tenemos una elaboración y una cierta deliberación interna sobre tales inquietudes.

ciones del Estado y especialmente dentro de las propias fuerzas militares”. Rey agrega una observación importante para comprender el fuerte protagonismo que en la información sobre la política gubernamental tiene la figura del presidente:

Pero también es explicable que la información se asocie a la alta imagen y credibilidad del presidente Uribe, con lo que tendríamos un doble efecto: el de un Estado fuertemente concentrado en la figura del gobernante y una información densamente concentrada en la institución del gobierno. De esa manera, la legitimidad que tiene el gobierno sirve como marco de la legitimidad de la información (“Ahí se dice la verdad”). Esta concentración, que es aceptada por la comunidad en el caso del conflicto, no lo fue en el caso del referendo, como creyeron los estrategas de comunicación del gobierno. La

presencia presidencial en la información del conflicto se expresa sobre todo en los discursos (particularmente los que el presidente pronuncia desde instalaciones militares), en sus declaraciones a los medios y en “puestas en escena” en que se resalta una suerte de histrionismo presidencial (entrevistas que hace el propio presidente a desertores de la guerrilla, a militares heridos en operaciones como la de Urrao, en la visita a la Comuna 13 o a la zona de rehabilitación de Arauca, entre otras): la imagen se hace, a su vez, representación escénica para acentuar la convicción. El mecanismo funciona para la guerra pero no siempre para la política, así se acuda a un programa de *rating* en televisión como el *Gran hermano*. La explicación podría ser que el respaldo a la imagen presidencial se sostiene, preferentemente, sobre su planteamiento consistente de la represión a los grupos armados ilegales (Rey y Bonilla et al., 2004: 24 y 66-67).

Unanimismo mediático, “incriticabilidad” del presidente y efectos de intolerancia en la cultura política

Resumiendo las líneas de argumentación que hemos presentado arriba, podríamos decir que los medios de comunicación crearon particularmente durante los primeros 18 meses de gobierno de Álvaro Uribe Vélez –y han tratado de seguirlo haciendo después aunque ya no con el mismo éxito– un inconveniente y perverso clima de “incriticabilidad” del presi-

dente, de intocabilidad de Uribe y de su política por cualquier tipo de opinión crítica frente a él. Ese clima de unanimismo, acompañado a menudo del llamamiento a cerrar filas alrededor del presidente, ha producido un peligroso efecto de intolerancia de parte de muchos uribistas hacia las voces disidentes frente a la política del presidente.

En un interesante y oportuno artículo, que aporta evidencias graves sobre un tema siempre inquietante cual es el de la intolerancia presente en la cultura política colombiana, el periodista Daniel Samper Pizano rememora la historia de las quejas de sus lectores con su columna desde sus inicios en el periodismo en 1970, y hace alusión a una serie de cartas “tan amenazadora y escalofriante que, unida a ciertos consejos de las autoridades, me obligó a tomar el camino del exilio hace dieciséis años”. Luego agrega cómo, a pesar de lo anterior,

nunca habían sacudido mi buzón tantos mensajes tan insultantes, procaces e iracundos como la semana pasada, cuando me atreví a confesar que el actual gobierno me gusta menos que a la mayoría de la gente. No sólo me embadurnaron de porquería verbal, sino que algunos exigieron que *El Tiempo* desterrara mi columna. La consigna de éstos no era discutir, sino suprimir (...) Exceptuadas unas cuantas misivas vehementes pero respetuosas a las que di respuesta personal, como acostumbro, las restantes tenían dos características comunes. Prácticamente todas acudían a insultos y descalificaciones personales o familiares; y prácticamente ninguna ofrecía argumentos en contra.

Agrega más adelante el columnista que le alarma “el pantano de intolerancia ideológica y degradación dialéctica al que hemos llegado. Basta arañar levemente para descubrir que el mismo espíritu de odio auspiciador de nuestra violencia endémica se esconde, pero sin armas, bajo la epidermis de millones de colombianos”.²⁰

Si bien este unanimismo tiene que ver con la cultura política previa de la población; con sus grados de formación y de información sobre la historia, la política y los problemas nacionales; con su nivel de familiarización con el debate razonado y la crítica argumentada del poder o de quien opina diferente, seguramente tiene que ver también con ciertas necesidades de encuentro de Mesías o salvadores, o de líderes en quienes creer y a los cuales entregarse de manera total, sin fisuras ni reticencias, en medio de nuestras incertidumbres de los últimos años en torno a si somos o no una nación viable, de nuestras dudas sobre si tiene sentido o no vivir en Colombia, y de la pérdida relativa de fe en los políticos y en la política. Lo cierto es que esos primeros 18 meses de Uribe estuvieron notoriamente marcados en las lecturas preferenciales de los grandes medios de comunicación, y sobre todo en las del medio televisivo, por el mensaje implícito –y a veces explícito, como pasó con la propaganda gubernamental

20 Daniel Samper Pizano, “Cambalache”. “La dialéctica del insulto. Ante la creciente intolerancia, disenter de la mayoría se volvió peligroso”, *El Tiempo*, 13 de agosto de 2003, pp. 1-13.

mental del referendo— de que “el que no apoye a Uribe es un apátrida”, o como bien lo anota Samper Pizano en

la columna citada, por la suposición de que “estar de acuerdo con el gobierno se volvió deber ciudadano”.

La intolerancia y el unanimismo no son sólo de los medios, tienen que ver también con el estilo del propio presidente Uribe

El unanimismo que hemos venido criticando tiene que ver también con una cierta terquedad, rigidez dogmática y obsesividad de Uribe ante algunos temas, con su actitud soberbia, su dificultad para ceder y conceder, y sobre todo para reconocer equivocaciones en ocasiones en que en virtud de los errores cometidos es necesario hacerlo dando signos claros de rectificación a la opinión nacional e internacional.²¹

El error más costoso para sus relaciones externas, pero también para el campo de sus apoyos internos, fue su discurso en la posesión del nuevo comandante de la Fuerza Aérea a comienzos de septiembre de 2003, donde enfiló baterías contra las organizaciones no-gubernamentales de defensa de los derechos humanos (a las que clasificó entre algunas “organizaciones respetables de derechos humanos” y otras en su opinión no tan respetables, “que trafican con los derechos humanos y están al servicio del terrorismo”), y donde fustigó el Informe Nacional de Desarrollo Humano auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el cual enfatiza, entre otros aspectos ligados al con-

flicto vivido por el país en los últimos cuarenta años, los costos que ha representado y que representa hoy la confrontación militar. La inclusión en el mismo saco de las “organizaciones respetables de derechos humanos”, de los “traficantes de los derechos humanos al servicio del terrorismo”, y de un informe encabezado por un respetado académico de reconocidas cartas liberal-democráticas como Hernando Gómez Buendía, estudio descalificado desde una despectiva alusión a los intelectuales como “críticos teóricos” (léase “pifiados” o desenfocados en sus apreciaciones de la realidad), fue tal vez uno de los errores más costosos del presidente en esa primera etapa de su gobierno. Costoso porque su declaración la hace ante un auditorio militar, justamente durante la Semana por la Paz, en vísperas de la celebración del día mundial de los derechos humanos y en momentos en que la comunidad internacional tiene puestos sus ojos en la grave situación

21 Un sutil perfil crítico del presidente Uribe, de su carácter personal y sus actitudes políticas en el contexto de la coyuntura de sus declaraciones sobre las ONG, es la columna “Imprudencia, ira o demagogia”, del escritor y columnista Óscar Collazos, *El Tiempo*, viernes 12 de septiembre, pp. 1-14.

de violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ligada al conflicto armado interno que vive el país.²²

Las declaraciones del presidente son costosas no sólo para su imagen interna y externa como presidente y como gobierno, sino también para la democracia. Su intervención no sólo refuerza viejos prejuicios del estamento militar sobre las organizaciones no gubernamentales, los grupos de izquierda y las organizaciones populares, sino que dificulta una mayor apertura de los militares a una política de respeto efectivo y activo de los derechos humanos como expresión de su acatamiento y asimilación de principios básicos de cultura democrática. Recordemos que unos pocos meses antes un oficial del ejército condenado por el secuestro y asesinato del empresario textil Benjamín Koudari se había escapado de la guarnición militar donde estaba preso, y la opinión se enteró a través de la prensa de que dicho oficial estaba encargado de la política de educación

en derechos humanos en el batallón donde pagaba su pena.²³

Costosas también para la democracia las declaraciones de Uribe en el sentido de que sus palabras, pronunciadas en un contexto de ausencia de garantías para la vida y la seguridad ciudadana de sectores especialmente vulnerables como los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, dirigentes del magisterio y del movimiento popular, colocan en la picota pública y bajo situación de grave riesgo a grupos, organizaciones e individuos que han jugado y juegan hoy un importante papel en la defensa de un ordenamiento jurídico básico de garantías y derechos ciudadanos.²⁴

Ese tipo de declaraciones del presidente contradicen paradójicamente algunas de las orientaciones del trabajo de la Vicepresidencia y del Ministerio del Interior, enmarcadas dentro de los lineamientos de la política de seguridad democrática, dirigidas a brindar protección y garantizar la seguridad física de algunos de esos sectores especialmente vulnerables arriba mencionados. La política de seguridad física termina así contradicha por la inseguridad simbólica generada por la acción retórica del presidente de la república. Tal vez por eso la Corte Constitucional, fallando a favor del gobierno dos acciones de tutela presentadas en su contra, se pronunció a finales de 2004 recordándole al

22 Véase la dura crítica al presidente formulada desde el editorial de *El Tiempo* "Una salida de tono", del miércoles 10 de septiembre de 2003, pp. 1-14.

23 Esta fuga, y el hecho irónico de estar dicho oficial a cargo de la educación en derechos humanos, merecieron un editorial crítico del diario *El Tiempo*.

24 Sobre las reacciones de las ONG de derechos humanos a las acusaciones del presidente Uribe, véase la nota "Polvareda por réplica de Uribe. ONG afirman que no hacen eco a actores armados ilegales", en *El Tiempo*, miércoles 10 de septiembre de 2003, pp. 1-2.

ejecutivo –no obstante no haber encontrado mérito para aceptar las acciones de tutela de los querellantes– la responsabilidad social que le cabe por el potencial impacto y las implicaciones de su discurso público así como sus obligaciones en términos de ponderación en pronunciamientos que puedan afectar negativamente la valoración e imagen social de grupos vulnerables de la sociedad.

Otras actitudes que de manera indirecta muestran la arrogancia del presidente Uribe tienen que ver con el respaldo brindado permanentemente a su ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño, cuyas declaraciones contra la Constitución de 1991, la acción de tutela y las decisiones y la figura misma de la Corte Constitucional, muy probablemente Uribe siempre compartió. Para varios analistas y columnistas políticos, muchas de las posiciones duras que aparecían en boca del ministro Londoño eran una forma de manifestar aquellas opiniones y orientaciones que el presidente Uribe si bien compartía, no se atrevía a expresar en público.

La actitud arrogante e intransigente de Uribe se expresó además en el trato brindado a sectores importantes de la comunidad internacional, no sólo en el caso ya nombrado de sus declaraciones acusatorias abusivamente generalizantes contra las ONG,

muchas de las cuales son respaldadas política y financieramente por los gobiernos o por sectores sociales importantes de Estados Unidos y de varios países europeos. También en sus declaraciones críticas a la Organización de las Naciones Unidas, poco políticas y desacertadas, en medio de un contexto de política interna muy confuso, seguido con mucha preocupación por distintos organismos de la ONU, pero también por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y por personalidades democráticas en Estados Unidos, Europa y América Latina, que en esos momentos veían con preocupación los excesos en la aplicación del estado de excepción o conmoción interior, los abusos con las capturas masivas y las delaciones a través de la red de informantes, así como la promoción de un estatuto antiterrorista que en nombre de la lucha contrainsurgente afectaba y socavaba innecesariamente garantías y derechos ciudadanos fundamentales poniendo en serio riesgo el Estado de derecho. La negociación confusa con los paramilitares –en esos primeros 18 meses mucho más confusa que ahora–, sin un sólido respaldo nacional e internacional, la cual les confería a esos grupos y a sus integrantes un claro pasaporte a la impunidad, sin que se promulgaran claras normas de reparación jurídica, simbólica y material de la población afectada por sus acciones terroristas,

masacres y despojos de tierras constituyó, hasta comienzos de 2005, cuando el problema explota dramáticamente en los medios de comunicación, otro asunto clave de la preocupación europea desatendido o pésimamente manejado por el gobierno Uribe.

Resumiendo, muchas de las declaraciones de Uribe y de algunos de sus funcionarios quisieran pedirle a la sociedad internacional una alineación incondicional con la política de seguridad democrática, o su conversión en una especie de “internacional” uribista de respaldo a su política interna, de la misma manera

como en el ámbito interno algunos funcionarios, medios y periodistas invitan con cierta frecuencia “a cerrar filas” alrededor de la figura del presidente Uribe o, en el mismo sentido, a “rodear al presidente Uribe”. En el discurso y en la actitud del presidente demandando apoyo incondicional de la sociedad internacional parece expresarse también cierto provincianismo y encerramiento del país, muy presentes en nuestra cultura, y le han dificultado una comprensión más abierta y plural de la sociedad internacional, de sus actores, organizaciones, causas sociales, y grupos de opinión y de presión.

Los debates sobre la reelección en el 2004 y sobre la Ley de Justicia y Paz en el 2005, y las nuevas erosiones del unanimismo progubernamental

Dos frentes nuevos de cuestionamiento y de oposición, y ya no solamente de distanciamiento crítico de la opinión con respecto a la política del presidente Uribe, se abrieron durante el 2004. El uno, al destaparse las cartas y expresar el presidente su intención de modificar la Constitución con miras a hacer posible la reelección presidencial inmediata. El otro, al evidenciarse en septiembre, y reconocerse públicamente por parte de las ediciones dominicales de los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador*, la “toma” de amplios territorios y

regiones de la geografía nacional por parte de los grupos paramilitares en medio del proceso de negociación que el gobierno Uribe adelanta con ellos. A partir de ese destape –seguramente muy tardío– de la magnitud de la presencia económica y política del paramilitarismo en el país, la situación informativa y el debate público han evolucionado hacia el reconocimiento a comienzos de 2005, gracias a la confluencia de muchas voces críticas nacionales e internacionales, de las inconsistencias de la política de negociación gubernamental con los

paramilitares. El agudo debate suscitado en febrero, cubierto ampliamente por los medios, alrededor de la Ley de Verdad, Justicia y Reparación, las supuestas o reales concesiones indebidas a los paras en la mesa de negociación, las demandas de justicia, y la magnitud de las penas y de los riesgos de una negociación que consagre la impunidad, coincidiendo con la reunión en Cartagena de representantes de la sociedad civil, gremios y ONG con el gobierno Uribe y los posibles aportantes europeos a la financiación de la desmovilización y reinserción paramilitar, han constituido un tema y un núcleo duro de cuestionamiento a la política de seguridad democrática y en general a la gestión de Uribe Vélez.

Los golpes militares de las FARC en Iscuandé y Dabeiba a comienzos de 2005, zonas ubicadas fuera de la zona de influencia del Plan Patriota donde se estaría dando prioridad a la acción contrainsurgente de cerco al secretariado de dicha organización, acciones que irrumpen de manera abrupta en medio de la celebración mediática de la eficacia de la seguridad democrática, han causado comprensibles alarmas en una opinión a la cual se le ha vendido la idea de un triunfo rápido y fácil sobre la guerrilla. Estas acciones militares de la guerrilla horadan las visiones mediáticas idílicas de la seguridad democrática. Al día siguiente de los hechos de Iscuandé y

Dabeiba, el analista militar Alfredo Rangel anota que tales acciones parecerían expresar el comienzo del fin del repliegue estratégico de las FARC. Ante el despliegue dado a las acciones de las FARC por los medios de comunicación, el fogoso vicepresidente y periodista Francisco Santos protesta por el papel que estarían jugando los medios como “caja de resonancia del terrorismo”, demandando de aquellos y del periodismo solidaridad con el gobierno –lo cual sonó a solicitud de no informar sobre hechos militares desfavorables al gobierno–, suscitó las protestas de sus antiguos colegas, y la consecuente rectificación o más bien matización de sus declaraciones por parte de Santos.

Volviendo al tema de la reelección, hay que anotar que el destape de la aspiración del presidente a la reelección inmediata, y su aprobación en el Parlamento durante el 2004, suscita cuestionamientos a la lógica de cambio de las reglas de juego para beneficio propio, críticas al sentido mesiánico y personalista de la aspiración reeleccionista inmediata del presidente, cuestionamientos de los vicios de procedimiento y de las presiones y seducciones indebidas a los parlamentarios en la aprobación de la reelección en el Congreso, destape de las prácticas clientelistas del gobierno en el servicio exterior en contravía del discurso gubernamental de la meritocracia, y por supuesto el surgimiento

de aspiraciones de eventuales candidatos y contendores del presidente Uribe que empiezan a

expresar sus críticas y sus distanciamientos con la política gubernamental.

El choque del talante autoritario de Uribe con una importante tradición política y filosófica liberal

Habría que agregar que el talante autoritario e ideológico del presidente Uribe ha empezado a chocar con un ideario liberal-democrático presente en la cultura política colombiana, al interior del liberalismo, de la izquierda democrática y de sectores progresistas del conservatismo, que perciben con sospecha y preocupación las rigideces doctrinarias del presidente, su negación de las realidades del conflicto armado y de la crisis humanitaria que

vive el país, así como su espíritu de cruzada en la proyección internacional de la seguridad democrática, que ha ocasionado traumatismos como los vividos a comienzos de 2005 en las relaciones con Venezuela a raíz de la captura del guerrillero Granda en territorio venezolano en una clara violación de la soberanía y la normatividad internacional, y arriesgando la relación con el segundo socio comercial del país.

Final: hacia un periodismo con agendas propias y proyectos de país

El periodismo colombiano ha desarrollado un conjunto de importantes aprendizajes en el cubrimiento del conflicto armado, pero también en el de las negociaciones de paz. Los periodistas están vinculados en parte con ciertas posibilidades de autonomía frente a las fuentes institucionales y gubernamentales, y frente a los actores armados extrainstitucionales, con el fin de producir una información cierta y confiable. Tales aprendizajes son desiguales, dependiendo de las condiciones sociales, organizativas y ocupacionales en que se mueven los distintos periodistas y comunicadores sociales. Mientras en Bogotá y algunas capitales departamentales se cuenta con condiciones de trabajo más o menos buenas para un sector del periodismo, con recursos intelectuales, institucionales y financieros para promover procesos de estudio y de autorreflexión, en muchos departamentos pobres y regiones y localidades apartadas de las grandes ciudades, los periodistas son predominantemente empíricos, y carecen de esas posibilidades. Los aprendizajes aludidos son desiguales también en cuanto a su sistematización en investigaciones, códigos de ética, manuales de estilo, normas interiorizadas de trabajo o materiales para la formación de periodistas y comunicadores sociales.

Y son desiguales y contradictorios en la medida en que en virtud del dominio territorial de paramilitares o guerrilleros en vastas zonas de la geografía nacional, los aprendizajes tienden a funcionar allí más en dirección hacia las autocensuras, los silencios cómplices o la neutralidad pasiva como actitud que permite hasta cierto punto salvaguardar la vida, la integridad física y la dignidad personal.

Como hemos tratado de mostrarlo arriba, junto a los aprendizajes democráticos que se han venido produciendo, coexisten las prácticas de reporteros, editores y dueños, de casarse con sus fuentes, sobre todo con las oficiales, o de comprometerse interesadamente con el respaldo a los poderes gubernamentales.

El medio televisivo, tal vez el más problemático y el más clave hoy para avanzar en la cualificación del debate ciudadano, tiene que ser pensado y reformulado por editores, dueños, reporteros, audiencias, académicos y críticos de medios desde una perspectiva que potencie sus compromisos cívicos y contribuya a superar su actual subordinación a lógicas mercantiles y faranduleras. La experiencia de City TV, tratando de posicionar los espacios de opinión y de debate en el *prime time*, es interesante y muestra las posibilidades del medio televisivo cuando se tiene cultura periodística.

Sectores importantes e influyentes del periodismo y de la academia se resisten, con grandes márgenes de autonomía, al discurso gubernamental de Uribe Vélez que niega el conflicto armado y la crisis humanitaria, y equipara de manera simplista el fenómeno de la insurgencia armada a simples bandas de terroristas. El discurso gubernamental es percibido a menudo como irreal, como un intento de tapar el sol con las manos. Ante estos intentos gubernamentales de volver a nombrar las cosas e imponer un país de fantasía, el periodismo debe seguir contribuyendo a evitar la uniformización ideológica de la sociedad y a preservar un clima de libertades, de pluralismo y de respeto por la vida y el pensamiento ajeno.

En el plano externo, si bien el discurso antiterrorista del gobierno Uribe Vélez ha tenido alguna eficacia para disminuir los márgenes de apoyo a la insurgencia armada por parte de algunas ONG y de algunos sectores radicales de la izquierda, sobre todo en Europa, de otro lado silencia o banaliza graves problemas de derechos humanos relacionados con conductas delictivas de actores institucionales, y vacíos graves de la política pública como la no construcción de una estrategia gubernamental y estatal clara de desmonte del paramilitarismo y de su poderío militar, económico, político y financiero en vastísimas regiones

del país. Lo que está hoy día en juego a este respecto es si Colombia podrá conformarse en las próximas décadas como un Estado democrático de derecho a lo largo y ancho de su vasta geografía, o si constituirá una democracia y un Estado colapsados y un país de señores feudales del narcotráfico, la delincuencia y la guerra, dueños absolutos de la vida y la riqueza de sus respectivas regiones. Un asunto que debe empezar a interesar al periodismo y a la academia de las ciencias sociales de modo más sistemático, es el de cómo se nos percibe como nación, como conflicto y como cultura por parte de la comunidad internacional y nuestros vecinos latinoamericanos.

Los próximos meses presentarán al periodismo el desafío de una cobertura adecuada del proceso de reelección presidencial, aprobado ya por la Corte Constitucional. Las garantías a la oposición, y una competencia abierta de ideas y de programas en condiciones de equidad, tolerancia y de igualdad de acceso constituyen una de las principales demandas de la sociedad a los medios y al periodismo.

Otros retos importantes tienen que ver también con dar complejidad a la agenda de la seguridad democrática, precisando de un lado los aspectos que resultaría clave y estratégico mantener como política de Estado, los que habría que desechar por abusivos de las libertades y los derechos, pero incorporando también los temas sociales que tendrían que incluirse en una propuesta integral de seguridad democrática y que han estado ausentes de la discusión ciudadana y de la formulación de esa política por parte del gobierno. En este sentido sería conveniente ampliar la agenda de debate ciudadano propuesta por los medios y el periodismo, exageradamente centrada en los aspectos militares de la seguridad democrática del presidente Uribe.

Con respecto a la información sobre la guerra y la política militar del Estado, la lección de estos dos años largos del gobierno Uribe es que visiones demasiado concesivas y benévolas con el poder pueden acarrear grandes frustraciones colectivas o permitir grandes abusos sino se reemplazan por construcciones mediáticas y periodísticas sólidas, más capaces de dar cuenta de la complejidad de estos fenómenos y de producir una información fidedigna sobre el conflicto.

Tal vez, en los procesos de construcción de opinión pública desde el periodismo, los medios, los ciudadanos y grupos sociales informados y deliberantes, requerimos superar el entusiasmo ciclótico con la paz o con la guerra alternativamente, retomado también por los distintos candidatos en las coyunturas electorales ante

los fracasos de una u otra opción política. Debemos superar esos bandazos a través de la construcción de unos consensos que soporten una política pública para el manejo del conflicto y para la búsqueda de la paz.

Es importante mantener abiertas desde el periodismo, los medios y otras instancias de construcción de la opinión las compuertas de la paz y la negociación política. Las iniciativas y los esfuerzos de paz de regiones, poblaciones y organizaciones sociales no deben estigmatizarse ni menospreciarse en su capacidad de ser noticia y de concitar el interés de la sociedad hacia un posible proceso de reconciliación.

Finalmente, tendríamos que decir que en medio de la tarea de defender una importante tradición de libertad de prensa que nos ha caracterizado como nación, el periodismo y los medios deben adelantar esfuerzos paralelos para que esa libertad no constituya una libertad soberbia, sino que corra paralela con obligaciones y deberes, con actitudes autorreflexivas y prácticas claras de autorregulación. ■

Bibliografía

- BLUMLER, Jay G. (ed.). 1993. *Televisión e interés público*. Barcelona: Bosch Comunicación.
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 2004. *Estado de la libertad de prensa en Colombia 2004*. “A pesar de una leve mejoría la situación sigue siendo grave”. Bogotá.
- GÓMEZ, Camilo. 2002. “FARC, ¿autistas y vendedoras de falsas ilusiones? Entrevista con el Comisionado de Paz Camilo Gómez”. Bogotá: *Lecturas Dominicales de El Tiempo*, domingo 28 de julio, p. 3.
- GÓMEZ, Patricia y VELÁSQUEZ, Mónica et al. 2003. *La guerra: una amenaza para la prensa*. Bogotá: Medios para la Paz.
- INDH. 2003. *Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia – 2003*, capítulo 18, “Cambiar los imaginarios: educación y medios de comunicación”. En *El conflicto, callejón con salida*. Bogotá: UNDP.
- Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 2004. Informe Anual 2004. “Colombia, menos agresiones contra la prensa ¿más libertad?” Bogotá.
- LÓPEZ DE LA ROCHE, Fabio. 2003. “El periodismo, ese relegado objeto de estudio y de debate ciudadano”, en *Diálogos de la comunicación*. Lima: Felafacs, No. 67.
- LÓPEZ DE LA ROCHE, Fabio (investigador principal) y Leandro Peñaranda y Nelson Castellanos (coinvestigadores). 2001. *Informe final de la investigación*. “Rutinas profesionales y discursos hegemónicos en la información periodística sobre conflicto armado y proceso de paz con las FARC en Colombia durante 1999”. Bogotá: Colciencias-IEPRI.
- MANRRIQUE, Alejandro y CARDONA, Iván. 2003. “Situación laboral de los periodistas en Colombia. Informe de la investigación”. En Cadavid, Amparo (ed.). 2003. *Cátedra “Konrad Adenauer” de comunicación y democracia*.

Situación laboral del periodista en Colombia 2003. Bogotá. Konrad Adenauer Stiftung y Facultad de Comunicación y Lenguaje Universidad Javeriana.

MCQUAIL, Denis. 1998. *La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

MONSIVÁIS, Carlos. 2002. “Entrevista a Carlos Monsiváis”, Bogotá, *El Tiempo*, sábado 23 de marzo.

RAMOS, Leandro, VERDUGO, Jorge y RUBIANO, Elkin (investigadores) y LÓPEZ DE LA ROCHE, Fabio (asesor). 2004. *Análisis de la recepción televisiva en audiencias socio-culturalmente diferenciadas. Informe de investigación*. Bogotá: Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura (IECO), Universidad Nacional de Colombia – Comisión Nacional de Televisión (CNTV).

REY, Germán y BONILLA, Jorge Iván et al. 2004 (s. f. en el texto). *Calidad informativa y cubrimiento del conflicto. Estándares de calidad periodística en el cubrimiento del conflicto armado en Colombia*. Bogotá: Proyecto “Antonio Nariño” para la libertad de prensa.

RINCÓN, Omar y RUIZ, Marta (eds.). 2002. *Bajo todos los fuegos. Los periodistas en el conflicto colombiano*. Bogotá: Proyecto “Antonio Nariño” para la libertad de prensa.

RUIZ, Marta. 2002. “Los periodistas y sus dilemas”. En Rincón, Omar y Ruiz, Marta (eds.). 2002. *Bajo todos los fuegos. Los periodistas en el conflicto colombiano*. Bogotá: Proyecto “Antonio Nariño” para la libertad de prensa.

Tercer Seminario-Taller “Fuerza pública y periodismo en una sociedad en conflicto armado”. Conclusiones y recomendaciones. 2004. Bogotá, mimeo.

VALENCIA COSSIO, Fabio. 2000. “Paciencia y fe”. *El Espectador*, 31 de diciembre, p. B2.